

sí y por su esposa, disponiendo que si no se verificaba el pago se procediese al embargo respectivo de los bienes y al remate de ellos; y Considerando: que en el expediente aparece, que Delgado se opuso al pago diciendo, que la cantidad que se le cobraba no era la debida, con lo cual dió lugar á que el punto se convirtiera en contencioso: que la ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, al conceder á los cobradores de contribuciones la facultad de rematar bienes de los causantes, no puede tener efecto, sino en el caso de que no se ofrezca contienda, como es de interpretarse conforme á la Constitucion, supuesto que las funciones judiciales no pueden encomendarse á la autoridad administrativa: que de esto resulta, que el Administrador de contribuciones de Aguascalientes se ha excedido en el uso de sus atribuciones al disponer el remate de los bienes de Delgado, por carecer de toda facultad judicial, quedando por lo mismo violadas en la persona del promovente, las garantías consignadas en el artículo 16 de la Constitucion general; y Considerando ademas: que con arreglo á la misma, la Administracion de Justicia es gratuita; de conformidad con lo que dispone en el artículo 101, se decreta:—1º: Que se reforma la sentencia pronunciada respecto de esto juicio, el 10 de Mayo próximo pasado, por el Juez de Distrito de Aguascalientes, en la parte que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege en el presente recurso á D. Rosalío Delgado.—2º: La Justicia de la Union, ampara y protege á D. Rosalío Delgado, contra los actos posteriores al embargo.—3º: Se revoca dicha sentencia en la parte que condena á la de Delgado al pago de las costas y de los honorarios del Asesor.—4º: Lo acordado. Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que for-

maron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*J. Garcia Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 14 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por Pedro Raso, contra su consignacion al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En el presente juicio, el soldado Pedro Raso ha justificado de un modo legal, que fué consignado al ejército contra su voluntad por disposición del Comandante del cuerpo número 15 de Caballería, quien carece de facultades para dar esas determinaciones.

Este hecho es atentatorio y viola las garantías que á todo hombre otorga el artículo 5º de la Constitucion federal. En consecuencia, es de amparársele con arreglo á la ley de 20 de Enero de 1869.

El Promotor pues, en vista de lo actuado, y con fundamento de la ley citada, pide á V. que se sirva decretar el amparo en los términos que lo solicita el promovente, por ser de justicia.—Zaragoza, Mayo 15 de 1873.—*M. Sanchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla, Mayo 20 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Pedro Raso contra el C. Mayor del 15 de Caballería, por haberlo destinado á servir en ese Cuerpo, á causa de haber creído que tomó parte en la desercion de su sobrino José de Jesus del mismo apellido, con lo cual haya violándose en su perjuicio las garantías que otorgan los artículos 5º y 13 de la Constitucion; el escrito de queja; el informe rendido por el C. Comandante, contra quien ha interpuesto el recurso; las pruebas rendidas; lo alegado; el parecer fiscal y demas que ha debido verse; Considerando: que el intercesado ha probado plenamente que ha tenido lugar el hecho que ha dado motivo á pedir el amparo: que aunque se ha informado por el Gefe del Cuerpo, que se presentó el quejoso voluntariamente, esto no aparece acreditado: y que al no querer prestar sus servicios en el Ejército, al obligársele, se violan en su perjuicio las garantías que otorga el artículo 5º de la Constitucion. En esta virtud y con fundamento de lo determinado por el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: Que la Justicia federal ampara y protege al C. Pedro Raso, por haber sido destinado á servir en el Cuerpo número 15 de Caballería, por el C. Comandante. Hágase saber; remítase el expediente á la Suprema Corte de Justicia para la revision y copias de este fallo á la redaccion del Periódico oficial del Estado y Semanario Judicial de la Federacion. El C. Juez de Distrito del Estado definitivamente juzgando, lo proveyó mandó y firmó. —Antonio Rivero.—Ante mí.—Antonio García Mozqueira.

Es copia que certifico y se saca en cumplimiento de lo mandado para su insercion en el Semanario Judicial de la Federacion. Puebla, Mayo 21 de 1873.—Antonio García Mozqueira, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 2 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por Pedro Raso, contra el mayor del cuerpo de Caballería número 15, que consignó al quejoso al servicio militar, por que se desertó el sobrino de él, con cuyo acto reputa violadas en su persona las garantías á que se refieren los artículos 5º y 13 de la Constitucion federal; y considerando: que en el expediente aparece probado el hecho que motivó este amparo; que no está probado que Pedro Raso se presentara voluntariamente á servir en el ejército, como lo afirmó la autoridad responsable, y que por lo mismo, se ha vulnerado en la persona del referido Pedro Raso la garantía á que se refiere el artículo 5º de la Constitucion federal; de conformidad con lo que dispone el artículo 101 de la misma, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 20 del próximo pasado Mayo, por el Juez de Distrito de Puebla, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Pedro Raso, por haber sido destinado á servir en el cuerpo número 15 de Caballería. Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Ndjera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 16 de 1873. *Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por Sóstenes Cardona, contra el C. Presidente municipal de la Villa del Cedral que lo condenó á la última pena.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor dice: que Sóstenes Cardona, sentenciado á la pena del último suplicio por el C. presidente del republicano Ayuntamiento del Cedral, conforme á la ley de 23 de Mayo de 1872, por creérsele cómplice en el robo con asalto y homicidio perpetrado la noche del 18 de Enero en el punto de la Estancita, jurisdicción de la Villa del Cedral, solicita amparo de la Justicia federal, fundándose en que sin estar justificado ese participio en el delito de que se ha hecho mérito, se le ha impuesto la pena de muerte.

Aunque el solicitante no expresa determinadamente las garantías violadas en su persona, segun lo dispone el artículo 4º de la ley de 20 de Enero de 1869, por el tenor literal de su solicitud de amparo se comprende muy claramente, que se queja de la falta de justificación con que fué pronunciada aquella pena tan terrible; y aun se refiere al 4º de los considerandos que ocuparon á la autoridad que lo juzgó.

En efecto, por esa parte de la sentencia se ve, que el C. Presidente de aquella corporación dá por sentado y confiesa, que conforme al derecho comun, las pruebas que existen contra Sóstenes Cardona no serian suficientes para pronunciar en su contra,

sentencia condenatoria, sin embargo de que por las leyes especiales, son suficientes las que existen en el proceso por bastar por ellas al convencimiento, segun las reglas del criterio comun, de que un individuo es culpable y por ello pueda aplicársele la pena designada por esas mismas leyes especiales.

El Ministerio no está conforme con esa opinion de la autoridad que ha juzgado á Cardona, porque no ve que las leyes especiales, cualesquiera que sean, y tambien el objeto á que se dirijan, puedan sobreponerse á las comunes, menguando por decirlo así los preceptos imprescriptibles determinados por las leyes naturales, que exigen y han obligado siempre á la autoridad que juzga, que al imponer la pena y mas la terrible de muerte, se obre con toda la circunspeccion, reposo é imparcialidad propias y convenientes á un fallo arreglado y justo. Quieren y han querido siempre esas disposiciones, que al imponerse la pena, sea despues de que aparezca que se hayan obtenido contra el responsable, las pruebas mas perfectas y completas que no dejen duda de la culpabilidad del delincuente contra quien se procede, y por eso aun previenen, que estas sean tan claras como la luz del medio dia, y aun en su espíritu se explican al grado de prevenirse, que por falta de ellas, vale mas dejar impune un delito.

Siendo esto así, no hay duda en que Cardona ha sido sentenciado fuera de las reglas prescritas por el derecho comun, y propiamente por meras coincidencias, indicios y sospechas, tan aisladas unas de las otras, que nunca pueden reunidas dar una prueba completa del delito porque se le ha juzgado. Esto lo dan á entender los varios puntos del 2º de los considerandos en que se funda dicha sentencia, pues por ellos se vé segun la copia que corre agregada á las fojas 8, 9 y 10 de esta pieza, que Cardona fué sentenciado á la pena última por haber asegurado á María del Refugio Córdova, persona de la familia robada, que lo conoció la tiempo del